

**BAJO EMBARGO HASTA LAS 13:15 HORA LOCAL (COSTA RICA),
19:15 GMT, MARTES 8 DE OCTUBRE DE 2019**

El tráfico de narcóticos devasta selvas de C.A. en áreas protegidas reconocidas mundialmente, alimentando al cambio climático; investigación indica que se debería invertir los fondos antidrogas de los EEUU en comunidades locales

Nuevos estudios muestran que las comunidades indígenas y locales, con fuertes derechos y una voz en el destino de los bosques, pueden resistir los carteles de la droga y ofrecen a la región la oportunidad de cumplir rápidamente sus promesas climáticas

SAN JOSE, CR— (8 de octubre de 2019) El tráfico de drogas y, paradójicamente, los esfuerzos para frenarlo están impulsando rápidamente la deforestación en los bosques tropicales más preciados de América Central, según un trío de estudios importantes que se publicaron hoy en el Pre-COP, un evento patrocinado por el Gobierno de Costa Rica en el período previo a la Conferencia de las Partes en la Convención Marco sobre Cambio Climático (COP25) en Chile en diciembre.

Los estudios realizados por investigadores en Texas, Oregón, El Salvador y Costa Rica revelan que la guerra contra las drogas financiada por los Estados Unidos ha empujado a los traficantes a áreas forestales remotas, donde la sombría economía subterránea que han construido está devastando el medio ambiente, causando directamente más de \$ 214.6 millones en pérdida de recursos naturales y culturales en los bosques protegidos de la región cada año.

"La deforestación de narco ahora afecta a grandes bosques tropicales en Guatemala, Honduras, Nicaragua, y también está comenzando a afectar a Costa Rica", dijo Jennifer A. Devine, profesora asistente de geografía en la Universidad Estatal de Texas y coautora de dos de los estudios. publicado hoy sobre el tráfico de cocaína en América Central. "Nuestros hallazgos sugieren que la mejor manera de abordar la deforestación, la violencia y la inseguridad alimentadas por las drogas en la región es invertir en la gestión comunitaria de la tierra para reconocer los derechos comunitarios sobre la tierra. Hacer esto también ayudará a salvar los bosques restantes de la región y abordar las amenazas climáticas. Pero tenemos que movernos rápidamente ", agregó la investigadora.

Un tercer estudio, realizado por la Fundación Prisma, con sede en El Salvador, también publicado hoy en la Pre-COP, muestra que los bosques comunitarios en el sur de México y América Central contienen suficiente carbono para cumplir con los compromisos de la región con el Acuerdo de París sobre el clima, si los gobiernos reconocen y hacen cumplir los derechos de las comunidades locales e indígenas y les permiten participar en las decisiones que afectan la gestión de la tierra y los recursos.

"Tomados en conjunto, estos trabajos confirman cuán vital es garantizar que las comunidades forestales locales tengan control a largo plazo sobre sus tierras y recursos forestales", dijo David Wrathall, profesor asistente de Geografía, Ciencias Ambientales y Gestión de Recursos Marinos en la Universidad Estatal de Oregón. "Si queremos reducir el riesgo de emisiones

causadas cuando se destruyen los bosques y salvaguardar el carbono en los bosques, tales derechos serán clave para evitar la interferencia humana peligrosa en la atmósfera", agregó.

El documento sobre el tráfico de cocaína y los esfuerzos de conservación en América Central concluye que los narcotraficantes buscan cada vez más paisajes remotos, a menudo en áreas protegidas, para garantizar rutas de tránsito físico para la cocaína. Pero el impacto local va mucho más allá del mero tráfico y conduce a socavar los sistemas de gobernanza, excepto donde los pueblos indígenas y tradicionales tienen fuertes derechos y un papel en la decisión de cómo se debe administrar la tierra.

Los traficantes de cocaína recurren a la ganadería, la agricultura a lavar dinero

"El deseo de lavar grandes sumas de dinero, además de establecer un control físico sobre territorios clave, ha llevado a los narcotraficantes a expandirse rápidamente en industrias que contribuyen a estos dos objetivos", dijo Wrathall. "Esto se traduce en grandes extensiones deforestadas para la ganadería, la palma africana y las actividades extractivas. La presencia de los narcotraficantes a menudo conduce a una transformación dramática del paisaje local. Redefine los límites y territorios alrededor de las nuevas economías extractivas que están dirigidas por autoridades ilegítimas asociadas con la violencia y la amenaza de violencia".

Con el apoyo de subvenciones del programa Pegasus en la Universidad Estatal de Colorado y el Centro Nacional de Síntesis Socioambiental (SESYNC),¹ los dos estudios sobre el tráfico de cocaína fueron producidos por investigadores de la Universidad Estatal de Texas, la Universidad Estatal de Oregón y la Fundación Neotrópica en Costa Rica, con contribuciones de investigadores de otras instituciones estadounidenses.²

Al observar los impactos del narcotráfico, los investigadores buscaron identificar las causas de la deforestación en áreas protegidas en todo el Corredor Biológico Mesoamericano, con un enfoque particular en la Mosquitia en Honduras, la región de Conservación de Osa en Costa Rica y la Reserva de la Biosfera Maya en Guatemala.

Una de sus conclusiones es que los fondos proporcionados por los Estados Unidos para políticas militarizadas contra las drogas, "en última instancia, han empujado el tráfico de drogas y el lavado de ganancias espectaculares en espacios remotos y biodiversos, donde amenazan tanto a los ecosistemas como a las personas, y esto socava los objetivos de conservación y medios de vida locales".

"De esta manera, la guerra contra las drogas está trabajando directamente en contra de los miles de millones de dólares invertidos en la conservación por los países donantes, las ONG internacionales de conservación, los grupos de defensa y las comunidades locales", dijo Wrathall.

¹ Apoyado con subvenciones del programa Pegasus en la Universidad Estatal de Colorado, el Centro Nacional de Síntesis Socioambiental (SESYNC) (1) y las Fundaciones de la Sociedad Abierta. Estas subvenciones fueron financiadas por la National Science Foundation.

² Esta investigación comenzó con el trabajo dirigido por científicos de la Fundación Neotrópica, con contribuciones del grupo Paisajes en Transformación en América Central, con el apoyo de una beca SESYNC. Los colaboradores también incluyeron a Erik Nielsen, PhD (Universidad del Norte de Arizona), Steve Sesnie, PhD (Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos) y Kendra Mc Sweeney, PhD (Universidad Estatal de Ohio)

Los investigadores descubrieron que las organizaciones multinacionales de narcotráfico han entrado en áreas forestales remotas para eludir la aplicación de la ley, devastando vastas áreas de árboles en Centro América para lavar su dinero de drogas. Al cerrar tratos con ganaderos, taleros e intereses pesqueros, los narcotraficantes causan la destrucción de los bosques que han estado en pie, a veces para siglos. Los carteles mexicanos en particular son capaces de aprovechar su influencia local para incrustarse en el paisaje, adquirir territorio y fomentar la violencia.

"Ahora sabemos que el narcotráfico es uno de los principales impulsores de las pérdidas de servicios ecosistémicos en las áreas protegidas del Corredor Biológico Centroamericano", dijo Bernardo Aguilar-González, Director Ejecutivo de la Fundación Neotrópica, autor con Devine y Wrathall del estudio sobre el impacto del narcotráfico en las áreas protegidas.

"Las actividades relacionadas con narco socavan los usos forestales tradicionales y la gobernanza de recursos, produciendo costos sociales y ecológicos significativos. También identificamos nueve conflictos en los puntos críticos de biodiversidad que estudiamos, con la mayor parte de la carga de los pueblos indígenas y otras comunidades locales".

Según los autores, los más vulnerables a los narcotraficantes son las áreas con políticas estrictas de conservación, como los parques nacionales, donde los estados ausentes o los actores del sector privado monopolizan la gobernanza y excluyen la participación de las comunidades indígenas y otras comunidades locales.

"Tanto la guerra contra las drogas como un modelo de conservación que excluye a las comunidades locales están impulsando este problema", dijo Devine.

Invertir en comunidades indígenas y locales para resistir conservar los bosques.

Por alarmantes que sean sus conclusiones, los investigadores argumentan que se puede plantear una solución alcanzable: su trabajo también reveló que los derechos de las comunidades forestales indígenas a gobernarse y controlar sus tierras pueden disuadir el tráfico y retrasar la deforestación.

"Invertir en los derechos de tierras comunitarias y en la gobernanza participativa en áreas protegidas es una estrategia clave para combatir el tráfico de drogas y el cambio climático simultáneamente", dijo Devine.

Pero la titulación de la tierra no es suficiente, dijeron a los investigadores los líderes de las comunidades. El éxito también requiere apoyo para la planificación y el financiamiento a largo plazo para las organizaciones comunitarias, una observación confirmada por Levi Sucre, un Bribri de Costa Rica y coordinador general de la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques (AMPB).

"Esta serie de estudios demuestra en detalle lo que la ciencia ha demostrado a nivel mundial", dijo Sucre. "Cuando los gobiernos invierten en los pueblos indígenas y las comunidades locales, y cuando reconocen y protegen los derechos de las comunidades a nuestros territorios, nosotros somos los mejores guardianes de los bosques, no solo para los pueblos, sino para todo el planeta".

Separadamente, en un informe técnico, Aguilar-González calculó la pérdida en recursos naturales y culturales de las actividades de tráfico en \$ 214.6 millones cada año, en los bosques oficialmente "protegidos" de Centroamérica.

"Eso es más del doble del presupuesto de conservación que los gobiernos de la región asignan a las áreas forestales", dijo Aguilar-González. "Dado que la Guerra contra las Drogas al conducir a los traficantes a áreas protegidas, y el papel que las comunidades podrían desempeñar para resistirlos, recomendaríamos invertir fondos antinarcóticos para apoyar los derechos territoriales comunitarios y la gobernanza participativa. Esta es una solución que funciona, y no tiene inconveniente".

Control comunitario sobre los bosques para cumplir con objetivos de París

Y hay un segundo beneficio al fortalecer el control de pueblos indígenas y comunidades locales sobre regiones forestales remotas y las áreas protegidas de Mesoamérica. El análisis de la Fundación Prisma de los planes de los gobiernos de México y Centroamérica para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París de 2015 encontró cantidades masivas de carbono en los bosques de estas comunidades.

Sin embargo, el estudio también muestra que los gobiernos no incluyen la gestión de tierras comunitarias en sus planes para reducir las emisiones de carbono, según el economista Andrew Davis, Director del Programa de Gobernanza Territorial y Forestal de la oficina de San Salvador de la Fundación PRISMA.

"Existe un amplio consenso de que los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades forestales son fundamentales para salvar los bosques y combatir el cambio climático", dijo Davis. "Nuestra investigación muestra que los gobiernos de la región están ignorando una solución que los ayudaría a reducir las emisiones de carbono, proteger a la región del flagelo del narcotráfico y apoyar el desarrollo sostenible".

Después de una década de monitoreo e informes sobre las iniciativas de mitigación del cambio climático por parte de las comunidades forestales en América Central, Davis dice que el hilo conductor de sus datos debería ser alarmante para los gobiernos y los científicos, dada la crisis climática y las crecientes preocupaciones de un mundo global recién despertado. público.

"Los gobiernos tienden a centrarse en proyectos de renombre, nuevas tecnologías y esencialmente han quitado sus ojos de estas formas simples de mitigar el cambio climático y la deforestación, y esta estrategia es posible a gran escala", dijo Davis. "Les falta mirar la evidencia empírica que se presenta ante ellos—que apoyar a las tierras que son administradas de manera cooperativa es una forma efectiva de proteger a los bosques y aumentar la seguridad de la región."

"Hemos visto durante años lo que funciona en lugares donde las comunidades pueden administrar tierras y recursos locales. Sus vidas y medios de vida dependen de mantener los bosques en pie", agregó Davis. "Ellos se encargan de eso. Y harán todo lo posible para asegurarse de que su tierra permanezca segura y sostenible."

Devine señaló en particular la difícil situación de las concesiones comunitarias en la Reserva de la Biósfera Maya, que están esperando que su gobierno actúe en una solicitud de renovación de concesiones que se otorgaron a las comunidades locales después de la mortal guerra civil de Guatemala, que terminó en 1996.

"A pesar de su éxito mundialmente reconocido en la reducción de la deforestación", dijo Devine. "Por lo tanto, renovar esas concesiones es una de las necesidades más urgentes para evitar mayores pérdidas".

###

La Fundación Neotropica es una organización no gubernamental, privada y sin fines de lucro, que ha estado trabajando desde 1985 para lograr un equilibrio entre el bienestar humano y la conservación de la naturaleza. Promueve la concertación social y la gestión de base para la conservación de los ecosistemas y su uso y acceso equitativo y justo. Su trabajo hoy se extiende a través de América Central, América del Sur y África Occidental, enfocándose en temas críticos que enfrenta el cambio climático hoy en día, como la justicia ambiental, la valoración de la deuda y los daños ecológicos, los conflictos ecológicos y la conservación comunitaria de los humedales costeros.

La Fundación PRISMA es un grupo de reflexión regional sin fines de lucro centrado en el medio ambiente y el desarrollo. Sus principales áreas de trabajo se centran actualmente en la región que se extiende desde México y Colombia. Sus programas de investigación y diálogo reúnen a múltiples partes interesadas para abordar los problemas de degradación y desarrollo de los recursos, a fin de contribuir a sociedades más equitativas, justas y sostenibles.